



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

PDP En la ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de marzo del
año dos mil veintiséis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala III de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
para resolver el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia
dictada en los autos “*Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/
Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 19202/2021/CA1, planteado al
efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho la sentencia apelada, **el
Señor Juez de Cámara, Doctor Sergio Gustavo Fernández dice:**

I.- Que por sentencia del 7/2/25 –y su aclaratoria del 19/2/25–, la
Sra. juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta
por Banco BBVA Argentina SA –en lo sucesivo, “BBVA”–. Por tal razón,
declaró que resultaba inaplicable al caso la limitación contenida en el artículo
194 de la ley del impuesto a las ganancias –en adelante, “IG”–, y ordenó el
reintegro de la suma de \$ 4.528.453.107,65, en concepto de IG, período fiscal
2019, con más los intereses correspondientes. Las costas las distribuyó en el
orden causado.

Expuso que la cuestión litigiosa se centró en la viabilidad de la
aplicación del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la
ley del impuesto.

Destacó que no se encontraba controvertido el ingreso de la suma
de \$ 8.492.184.578, por parte de la actora.

Afirmó que, en torno a la procedencia de la aplicación del sistema
de ajuste en trato, la cuestión había quedado zanjada por las decisiones de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaídas en las causas “*Santiago
Dugan Trocello*”, del 30/6/05 y “*Candy*”, del 3/7/09; y refirió al contenido de
dichos pronunciamientos.

Sostuvo que los parámetros que emergen de esos precedentes deben
ser tenidos en cuenta en el caso bajo examen, ya que, si bien en el ejercicio
fiscal 2019 se encontraba operativo el ajuste por inflación –cfr. leyes 27.430,
27.468 y 27.541–, ello no inhibió la revisión judicial invocada por la actora.

Expuso consideraciones en torno al informe pericial obrante en la
causa, al igual que sus observaciones y contestaciones, y explicó que una



pericia es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos y científicos, mediante la cual se suministra a la magistratura argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos debatidos.

Destacó que, más allá de lo sostenido por la representación fiscal respecto del dictamen pericial contable, no presentó ningún informe, novedad o resultado de la fiscalización en curso. De ahí que –aseveró– no existieron razones para apartarse de las conclusiones del informe del perito contador designado de oficio.

Puso de resalto que el perito contador calculó e informó una alícuota efectiva del impuesto del 64,27%, tomando el resultado impositivo sujeto a impuesto. De ahí que concluyó que la determinación del impuesto, con prescindencia de la aplicación integral del régimen de ajuste por inflación, excedería el límite razonable de imposición para el ejercicio fiscal 2019, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.

Destacó que la aplicación lisa y llana del artículo 194 de la ley 20.628 –cfr. ley 27.541, que prevé la imputación de 1/6 del ajuste por inflación en el período fiscal iniciado a partir del 1/1/19–, no alcanzaría para corregir el efecto inflacionario, en las operaciones dirigidas a determinar el impuesto.

En el *Considerando VI* la Sra. juez de grado exhibió ciertos guarismos –aprehendidos del dictamen pericial contable–, correspondientes a la inflación acumulada desde el 1/1/17 al 31/12/19, precisando que la variación operada en el índice de precios mayoristas nivel general –“IPIM”– e índice de precios al consumidor –“IPC”–, fue del 226,81% y 183,44 %, respectivamente.

Sostuvo que esto último permitiría admitir la ocurrencia de una situación económica perturbada, con la consecuente variación del poder adquisitivo de la moneda y la correlativa implicancia en el índice de precios, tanto mayorista como minorista.

Señaló que correspondía admitir el derecho de la demandante al recupero de la suma abonada en exceso, cuantificada en \$ 4.528.453.107.-





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Declaró inadmisibile el planteo de la actora referido a los intereses – esto es, de calcular y aplicar la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, “BCRA”–, ya que no comportó un planteo serio, razonado y crítico de la normativa cuya inaplicabilidad pretendió.

En otro orden, con relación a la resolución general (DGI) 2224, no la consideró aplicable al caso, expresando que carecería de razonabilidad imponer a la actora la obligación de someterse a un nuevo procedimiento administrativo, toda vez que ha resultado vencedora en la contienda judicial; además afirmó que la ley 23.982 prevé el modo en que deben ser cumplidas las sentencias condenatorias contra el Estado Nacional. Por ello, al hallarse reconocido el crédito en autos, se trataría de una deuda no consolidada, que debe regirse por lo dispuesto por el artículo 22 de la mencionada ley.

En cuanto a las costas del proceso, declaró que debían distribuirse por su orden, en mérito a las particularidades del caso y el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “*Candy*”.

II. Que contra dicha sentencia se alzaron ambas partes, interponiendo sus respectivos recursos de apelación el 13/2/25 –la actora a las 9:27 hs. y el fisco nacional a las 17:61 hs.–. Las expresiones de agravios fueron presentadas el 18/3/25, la actora a las 20:58 hs. y el fisco nacional a las 18:35 hs. La actora la contestó el 8/4/25 [21:32 hs] y el fisco nacional el 9/4/25 [20:11 hs].

El 15/4/25 [12:53 hs.] el Sr. Fiscal General acompañó su dictamen.

III. Que en su memorial, la representación fiscal expresa que la Sra. juez de grado efectuó un análisis superficial de la temática tratada, siendo arbitrario su pronunciamiento, por no contemplar los argumentos presentados por su parte.

Señala que la normativa federal, aun reconociendo la vigencia y aplicabilidad del ajuste por inflación, no declaró su inconstitucionalidad en el caso concreto.

Destaca que la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema en el caso “*Candy*” no puede ser equiparable a una declaración generalizada.



Precisa que en dicho caso se examinó la grave situación económica imperante en el año 2002, que representó un contexto económico y social diferente al del año 2019.

Niega que el mencionado precedente resulte aplicable al presente caso, ya que en éste no existió confiscatoriedad.

Señala que se ha valorado incorrectamente la prueba pericial producida en autos.

Dice que la verificación de todos los elementos aportados por la actora debe ser objeto de fiscalización por el personal especializado del organismo fiscal, en el marco de las facultades de verificación y fiscalización reconocida al organismo por la ley 11.683.

Cuestiona que se desconocieran los aspectos impugnados por su parte, respecto de la pericial contable producida en la causa.

Destaca que la pericia se basó en cálculos unilaterales, que no arrojó resultados fehacientes, y que fue producida a espaldas de su parte.

Afirma que, dadas las características de la actividad específica que realiza la actora –entidad bancaria–, se encuentra sujeta a regulaciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina –“BCRA”–, que se traducen en directivas en orden al plan de cuentas, forma de exposición y agrupamiento de las cuentas, posición monetaria positiva mínima, valuación de moneda extranjera, etc. De ahí que el activo se compone, en su gran mayoría, de rubros de tipo monetario, con escasa participación de bienes de uso.

Niega que la actora pueda computar el 100% del ajuste por inflación impositivo, pudiendo tan sólo hacerlo en 1/6, difiriendo los 5/6 restantes para los ejercicios futuros.

Cita la resolución JG 539/18 de la FACPCE; la RT 17 –sección 3.1: expresión en moneda homogénea– y las Comunicaciones A 6651 y A 6849 del BCRA, indicando que exceptuaron transitoriamente la aplicación de las normas que reconocen el efecto de la inflación, hasta los ejercicios iniciados el 1/1/20.

Apunta que el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, resolvió –mediante Resolución CD 107 del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

10/10/18– aprobar la segunda parte de la resolución JG 539/18: “Normas para que los Estados Contables se expresen en moneda de poder adquisitivo de cierre en un contexto de inflación en los términos de la sección 3.1 de la Resolución Técnica 17 y de la Sección 2.6 de la Resolución Técnica 41 aplicables a los ejercicios o períodos cerrados a partir de julio de 2018”. Luego, que el BCRA, mediante Comunicación “A” 6651 –22/2/19–, dispuso que dichos balances ajustados serían de aplicación para las entidades financieras sujetas a su control, respecto de los ejercicios iniciados a partir del 1/1/20.

Precisa que los balances contables de publicación aún se encuentran expresados a valores históricos; o sea, sin ajustar por inflación, incluso cuando se utilizan para evaluar la situación patrimonial y financiera para la toma de decisiones de la empresa.

Invoca la RG (DGI) 2224 y afirma que la aprobación de la liquidación en sede judicial no puede suplir la realización del procedimiento previsto por la normativa general, lo cual permite a ARCA llevar a cabo el control acerca del modo de cancelación y de los montos que corresponde devolver.

Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.

IV. Que, de su lado, la parte actora expresa agravios dirigidos contra lo resuelto en torno a los intereses y las costas del proceso.

Con relación a lo primero, destaca que correspondería aplicar la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, respecto de los intereses que se devenguen desde la interposición del reclamo administrativo de repetición, hasta la fecha de su efectivo pago y/o aplicación.

Menciona que oportunamente requirió que, para el eventual supuesto de que el Estado modificara la tasa de referencia regulada en la resolución MH 598/19 –lo cual, precisa, sucedió–, se aplicara la tasa pasiva promedio que publica el BCRA en la Comunicación 14290.



Declara que al presentar los alegatos hizo saber que primero se dictó la resolución ME 559/22 y luego la resolución ME 3/24, quedando establecidos parámetros inferiores al original.

Solicita que se revoque el fallo apelado, y que se disponga expresamente la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Sostiene que las tasas de interés previstas en todas las resoluciones descriptas, reportan una brecha entre la que rige cuando el Estado es sujeto acreedor de una obligación tributaria y cuando es el sujeto deudor.

Afirma que existe una afectación al derecho de propiedad consagrado en los artículos 14, 17 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, resultante de la aplicación de las resoluciones mencionadas. Ilustra con cuadros e imágenes los valores de las tasas en cuestión, al igual que la inflación según el IPC, y precisa que se trata de una tasa de interés que resarce una tercera parte de la inflación.

Desconoce que la doctrina del Alto Tribunal, recaída en la causa “*Arcana, Orazio*”, exima del análisis de razonabilidad de las normas en trato.

Por otra parte, indica que la Sra. juez *a quo* omitió tratar lo peticionado por su parte en la ampliación de demanda, en el sentido de que, respecto de los 5/6 restantes del ajuste por inflación no computados en el período fiscal 2019, se reintegraran los intereses devengados, al imputárselos en los períodos ulteriores.

Señala que si bien existiría confiscatoriedad del impuesto por la aplicación del artículo 194 de la ley del gravamen, de la pericia contable se desprendió que el diferimiento del cómputo de los 5/6 restantes en ejercicios futuros, también implica una grave afectación al derecho de propiedad.

Al respecto, argumenta que el diferimiento temporal de los 5/6 en cuestión, sin el reconocimiento de ninguna clase de actualización o compensación, no supera el test de razonabilidad de los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional.

Declara que era fundamental, y hacía a su derecho de propiedad, que el *a quo* se pronunciara expresamente respecto de este asunto.

Por ello, solicita que se revoque la sentencia aclaratoria apelada, resolviendo que los 5/6 del ajuste no computado, para el caso en que pueda





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

hacerlo en ejercicios posteriores, devenguen los intereses mencionados, calculados a la tasa pasiva del BCRA (cfr. Comunicación “A” 14290).

El segundo orden de agravios refiere a las costas del proceso, acusando que la Sra. juez de grado se apartó del principio general de la derrota, sin brindar fundamento suficiente para ello.

En prieta síntesis, menciona que la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación no representa una cuestión controversial en la actualidad.

Solicita que se revoque la sentencia en este singular y que las costas sean impuestas al fisco nacional.

Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en lo que fue materia de agravios, con costas.

V. Que, previo a todo, es importante recordar que no me encuentro obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones propuestas a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “*ACIJ c/EN- ley 24240- M° Planificación s/ proceso de conocimiento*”, del 29/5/08; “*MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/amparo ley 16.986*”, del 21/5/09; “*Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)*”, del 21/10/10; “*CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/proceso de conocimiento*”, del 18/4/11; “*Nardelli Moreira Aldo Alberto c/EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)*”, del 25/8/11, “*Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo*”, del 7/8/14, “*Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo*”, del 7/5/15, “*Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM*”, del 27/4/18, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, causa CAF 49.932/2015/CA2, “*D’Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo*”, del 2/5/24).



VI. Que, según se desprende de las constancias de autos, BBVA presentó un reclamo administrativo de repetición ante la entonces AFIP-DGI, el 23/10/20 –v. prueba instrumental acompañada por la actora–, y el 18/11/21 interpuso la demanda que dio inicio a estas actuaciones; su pretensión consiste en el reintegro de la suma de \$ 4.528.453.107,65, en concepto de IG-2019, con más los intereses.

Interpuso la acción en los términos de los artículos 81 y 82 de la ley 11.683.

El sustento de la pretensión fincó en la imposibilidad de aplicar íntegramente el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley 20.628 (texto ordenado en 2019).

En su demanda, BBVA expuso que el impuesto originalmente determinado alcanzó el valor de \$ 8.492.184.578,28, el cual, restado el “Credeb” –\$ 587.551.928,46–; las retenciones y percepciones –\$ 2.015.702,61– y los anticipos –\$ 1.143.419.702–, derivó en el pago efectivo de \$ 6.759.197.245,21.

Sostuvo que ingresó en exceso la suma de \$ 3.963.731.470,63.

Señaló que la activación del ajuste por inflación, limitado a un sexto –1/6–, derivó en la aplicación de una alícuota efectiva que superó holgadamente la del 30% fijada por el legislador.

VII. Que, junto con su demanda, la entidad actora acompañó los registros contables correspondientes al ejercicio comercial 2019; entre ellos, el estado de situación patrimonial y financiero; el estado de resultados consolidados y sus notas; la memoria; el informe de los auditores independientes; el informe de la Comisión fiscalizadora; la reseña informativa del ejercicio comercial y el informe especial elaborado por una contadora pública independiente.

En pos de toda esa información, de consuno con el resultado obtenido de la prueba pericial contable producida en la causa, se sustenta la pretensión de repetición de autos.

VIII. Que, en atención a las materias involucradas en esta *litis*, tornase necesario efectuar dos análisis estructurales, de cara a examinar si la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

sentencia apelada –en lo que conforma el fondo del asunto–, amerita su convalidación, o no.

Los análisis corresponden a los siguientes tópicos: *a)* el cambio normativo operado en los últimos lustros, con relación al mecanismo de ajuste por inflación, y *b)* la aptitud y la suficiencia de las argumentaciones y las probanzas arrimadas y producidas en autos, a fin de respaldar la pretensión de la accionante.

IX. Que, con relación al primer análisis descripto en el considerando precedente, sabido es que, con respecto al mecanismo de ajuste previsto en el Título VI de la ley de IG, desde un plano teórico la trama se generó a partir de la sanción de la ley 24.073 de 1992 –y sus normas concordantes–, cuyo artículo 39 dispuso que las actualizaciones impositivas debían tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta marzo de 1992.

En este orden, en la causa “*Establecimiento El Carmen SRL c/EN-AFIP DGI ley 24.073 s/proceso de conocimiento*”, Causa N° 48285/2003, del 11/11/10 –entre otros precedentes–, esta Sala reseñó la secuencia histórica del mentado mecanismo de ajuste, tanto desde el plano normativo –fundamentalmente desde su instauración por la ley 23.260, pasando por la aprobación de la denominada “*Ley de Convertibilidad del Austral*” (ley N° 23.928), hasta llegar al dictado de la ley 24.073, que suspendió la aplicación del mecanismo a partir de abril de 1992–; el plano macroeconómico y jurídico: salida del “*régimen de convertibilidad*” –con especial mención de la “*Ley de Emergencia Económica*” (ley N° 25.561), de los decretos 214/02, 1269/02, 554/03, de la resolución de la Secretaría de Hacienda 100/02 y la Nota Externa N° 10/02 de la AFIP–, hasta llegar al plano jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el dictado de los precedentes “*Santiago Dugan Trocello SRL c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo*”, del 30/6/05 (cfr. CSJN Fallos 328:2567) y “*Candy SA c/ AFIP y otro s/ acción de amparo*”, del 3/7/09 (cfr. CSJN, Fallos: 332:1571).

Allí se señaló que de los precedentes jurisprudenciales referidos, que resultan complementarios, se extrajo en primer lugar, y como principio



general, que el plexo normativo que impide a los contribuyentes la actualización de los balances impositivos para el cálculo de tributos, tuvo origen en el *“órgano al que el texto constitucional atribuye el ejercicio del poder tributario –respetándose, incluso, el procedimiento legislativo que estatuye el art. 52 de la norma suprema–”, por lo cual “no puede alegarse una violación al principio de reserva de ley tributaria, conclusión que no se modifica por el mero hecho de que haya existido un período en el que se observó un sensible proceso inflacionario”* (v. *Considerando IV*, fallo cit.).

En esa misma senda también se sostuvo que, sin perjuicio de ello, el Máximo Tribunal ha entendido que la eventual confiscatoriedad que puede provocar el cálculo del impuesto a las ganancias sin el ajuste, opera como excepción al principio general expuesto. Confiscatoriedad que ha sido definida, a la luz de la jurisprudencia clásica del Tribunal, como *“absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital” “que exceda los límites razonables de imposición”* (cfr. CSJN, Fallos: 332:1571, Considerando 14).

Se afirmó además que, siguiendo a la Corte Suprema, la configuración de esa excepción debe ser debidamente fundada y acreditada por el contribuyente que solicita la aplicación de la actualización en cuestión; carga probatoria que, en principio, sólo podría cumplirse a través de un peritaje contable (*“Bertoto, Bruera y Cía S.A.C. y F. c/Estado Nacional-AFIP-DGI s/demanda de repetición”*, del 19/5/10, cfr. CSJN Fallos 333:631). Y, en cuanto al contenido concreto de dicho medio probatorio, señaló que *“el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ya que tal compulsa no trasciende el ámbito infra constitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada”* (cfr. *“Candy”*, Considerando 4º y *“Dugan Trocello”*, Considerando único, segundo párrafo).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Para finalizar, se indicó que, sin perjuicio de lo descripto, si entre la ganancia neta sujeta al impuesto a las ganancias, calculada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de la aplicación del mecanismo de actualización “*se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar*” (“Candy”, Considerando 14º), deberá aplicarse el mecanismo de ajuste.

También indicó esta Sala –*in re “IBM Argentina SA c/EN-AFIP DGI-Resol 4/10 (REGN) s/ Dirección General Impositiva”*, Causa N° 2901/2010, del 26/12/18 y “*Akapol SACIFI c/EN-AFIP-DGI-Resol 41/07- periodos 2002/2003 s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 10144/2009, del 17/3/22, entre otras–, que nuestra Corte Suprema, luego de dictados los precedentes “*Dugan Trocello*” y “*Candy*”, negó que pudiera considerarse vulnerada la garantía constitucional de no confiscatoriedad, si los resultados del ejercicio arrojaban quebranto (v. asimismo Sala IV *in re “Industrial and Commercial Bank of China c. AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”*, CAF 63190/2019, del 7/11/23 y “*Gas Meridional S.A. c. EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 39544/2019, del 16/5/24 y sus citas).

Efectivamente, en el precedente “*Estancias Argentinas El Hornero SA c/ EN-AFIP-DGI c/ proceso de conocimiento*”, del 2/10/12, haciendo suyos los fundamentos del dictamen de la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema, luego de efectuar una reseña de los distintos tratamientos que tuvo el instituto del quebranto en la historia de la imposición sobre la renta, afirmó que: “*Tal solución pretoriana del Tribunal [en referencia a la jurisprudencia que admite la posibilidad de que un tributo resulte inconstitucional por confiscatorio] tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que el pago de uno o más gravámenes implicaban una lesión a la garantía de la propiedad individual, al reducir más allá de lo constitucionalmente tolerable sea la renta o el capital de los contribuyentes*”.



“Es de toda evidencia que el caso de autos no puede ser encuadrado dentro de los lineamientos de esa doctrina, por la sencilla razón de que no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados para verificar si hay una absorción inadmisible de éstos”.

Por tal motivo, y al no haber esa parte alegado ni mucho menos demostrado qué otra eventual causa de agravio constitucional padece a causa de la suspensión del mecanismo de ajuste inflacionario en trato, estimo que con lo dicho basta para desestimar su demanda” (los subrayados no me pertenecen) (cfr. CSJN, Fallos: 335:1923).

Dicha hermenéutica fue reiterada en los precedentes “*Alubia SA c/ AFIP-DGI s/ repetición*”, del 4/11/14; “*Natufarma SA c/ AFIP-DGI s/ demanda contenciosa*”, del 24/2/15 –en las cuales sostuvo que “...la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del precedente ‘Candy’ tiene por objeto evitar que se configure el supuesto de confiscatoriedad que -según los lineamientos de una tradicional jurisprudencia de la Corte- se produce cuando el pago de un impuesto implica la absorción, por parte del Estado, ‘de una porción sustancial de la renta o el capital’ ... sin que corresponda derivar de tal doctrina el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en otros ejercicios fiscales...”–; “*Consolidar Administradora de Riesgo de Trabajo ART SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol. LGCN 140/08 s/ DGI*”, del 11/8/15; “*Fava Hnos SA c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad*”, del 4/8/16; “*Favacard SA c/AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad*”, del 15/11/16; “*Bayer SA y otro c/ AFIP s/ impugnación de acto administrativo*”, del 14/8/18 y en “*Giorno SA c/ AFIP – DGI s/ varios*”, del 24/11/21.

A lo apuntado cabe adicionar que el criterio descripto fue mantenido por el Alto Tribunal en: “*Recurso de hecho deducido por la AFIP en la causa Maipú Automotores S.A. c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad*” y “*Fava SA c/ AFIP DGI s/ acción declarativa ordinaria*”, ambas del 19/10/23; “*Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Humberto Batistella S.A. c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad*”, del 24/10/23; “*Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Libertad S.A. c/ AFIP s/ acción*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

meramente declarativa de inconstitucionalidad”, del 2/11/23; “*Recurso de hecho deducido por la AFIP-DGI en la causa Humberto Batistella S.A. c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad*”, del 20/2/24 y recientemente: “*Syngenta Agro S.A. c/ EN-AFIP-DGI-resol. 6/10 (REGN) períodos fiscales 2002/3/4 y otros s/ Dirección General Impositiva*”, del 27/12/24 (voto de la mayoría).

Finalmente, es del caso mencionar que esta Cámara también admitió la reexpresión de las amortizaciones de los bienes de uso; la actualización de costos por enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles y de los quebrantos impositivos (Sala I “*Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 5894/2014, del 9/5/19; Sala II “*Orazul Energy Cerros Colorados S.A.c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 78131/2017, del 29/6/21; Sala III “*Orazul Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-RESOL s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 90935/2017, del 21/4/22 y “*Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 70967/2017, del 29/12/23, “*Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-RESOL s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 5058/2021, del 24/2/26; Sala IV “*Weatherford International de Argentina SA c/ AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 32870/2016, del 12/8/22 y Sala V “*Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 49252/2011, del 28/12/17), criterio que, por lo demás, fue también admitido por el Máximo Tribunal en las Causas N° 49252/2011 y N° 5894/2014, ambas caratuladas “*Telefónica de Argentina SA y otro c/EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva*”, con sentencias del 25/10/22.

X. Que, en orden a lo reseñado anteriormente, se desprenden dos resultados: *el primero*, que la Corte Suprema de Justicia, para arribar a las conclusiones descriptas, hizo mérito especialmente de circunstancias fácticas y probatorias en torno de la comprobación de la alegada confiscatoriedad en cada período cuestionado; *el segundo*, que a pesar de que las decisiones del Máximo Tribunal sólo resultan vinculantes para las partes y para los órganos



jurisdiccionales intervinientes en las causas en que son dictadas (cfr. CSJN, Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 316:180, entre otros), no puede soslayarse que los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina (cfr. CSJN, Fallos: 311:2004, entre otros), habida cuenta de que ese Tribunal resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo cual torna aconsejable seguir sus lineamientos para mantener la unidad de la interpretación de la ley (v. esta Sala *in re* “Cavaco, Adrián Alberto c/ UBA (Facultad Ciencias Exactas) s/ empleo público”, Causa CAF 24801/2009, del 20/5/14 y “Duke Energy Cerros Colorados SA”, Causa CAF 10307/2017, del 25/8/23, entre otros).

XI. Que, ahora bien, a lo explicado corresponde añadir las modificaciones legislativas operadas en los años 2017, 2018 y 2019.

A través de la ley 27.430 –sancionada el 27/12/17– se incorporó al entonces artículo 95 de la ley del gravamen –texto ordenado en 1997, actual art. 106– la siguiente regla: “*El procedimiento dispuesto en el presente artículo [en referencia al “ajuste por inflación”] resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%)*”.

“*Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior*”.

Posteriormente, a través de la ley 27.468 –sancionada el 4/12/18–, se lo sustituyó por el siguiente: “*Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios,*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”.

Por otro lado, la misma ley sustituyó las expresiones “*índice de precios internos al por mayor (IPIM)*” e “*índice de precios al por mayor, nivel general*” por “*índice de precios al consumidor nivel general (IPC)*”.

Por último, la ley 27.541 –sancionada el 21/12/19 y publicada en el Boletín Oficial del 23/12/19– sustituyó el artículo 194 de la ley del impuesto –texto ordenado en 2019–, estableciendo que: “*El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes...*”. De acuerdo con el artículo 87 de la ley, comenzaría a regir a partir del día de su publicación oficial.

XII. Que en función de lo explicado, y de cara a las posiciones asumidas por las partes contendientes, considero que las pautas y guías instituidas por el Alto Tribunal a partir del dictado del precedente “*Candy*”, deben ser aprehendidas e incorporadas en el presente estudio, sin por ello desatender las particularidades que actualmente evidencia el instituto tributario en trato.

De dicho precedente –tantas veces citado– se desprenden, entre otras, dos circunstancias de insoslayable mención:

i. Por un lado, la Corte Suprema, reseñando parte de la jurisprudencia relativa a las potestades con que cuenta el Poder Judicial, sostuvo que no es función de los jueces expedirse acerca del mérito de las políticas económicas decididas por los otros poderes, sino ponerles un límite cuando se traduzcan en una violación de la Constitución Nacional.

Bajo tal premisa –sumado al resto de los fundamentos reseñados en el *Considerando IX* de esta sentencia– revocó la sentencia que había declarado



la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073, artículo 4° de la ley 25.561 y decreto 214/02, en línea con lo que anteriormente había resuelto en la causa “*Dugan Trocello*”.

Adentrándome en el planteo de autos, colijo que, en línea con lo reseñado, las decisiones adoptadas por el legislador en punto al modo de medir las variables macroeconómicas y sus implicancias en la cuantificación de la base imponible del impuesto, son asuntos que, *per se*, no merecen reproche constitucional.

Esto quiere decir, pues, que las disposiciones adoptadas por el Poder Legislativo mediante las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, a la luz del planteo de autos, son plenamente aplicables al presente caso.

Vale evocar el principio según el cual “... *las leyes se presumen constitucionales, por aplicación del principio más general de validez presunta de los actos del poder público (Fallos: 190:142)*” (cfr. CSJN, Fallos: 239:157).

ii. Por el otro lado, a partir del Considerando 7° de “*Candy*”, el Tribunal se abocó al estudio de la cuestión restante, concerniente a la confiscatoriedad que había sido invocada por la firma contribuyente. Al respecto, sostuvo que si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste, y el importe que resulta de aplicarlo, no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, “*ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar*” (v. Considerando 14). Esto condujo a que, en el caso particular, se hiciera lugar a la demanda y se declarara aplicable el mecanismo de ajuste por inflación.

Pues bien, a la luz de lo que vengo exponiendo a lo largo de este considerando, tengo para mí que, sin perjuicio de la reimplantación del mecanismo de ajuste por inflación en nuestro ordenamiento legal, el test de constitucionalidad direccionado a corroborar si la carga impositiva es





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

confiscatoria se halla justificado, dado que responde a los principios, derechos y garantías supraleales que conforman y estructuran nuestro régimen republicano y democrático de derecho, reconocedor, entre otros, del derecho de propiedad de los habitantes (Constitución Nacional, arts. 14, 17).

XIII. Que lo explicado *supra* demarca los pasos a seguir en este examen, pudiéndose resumir de la siguiente manera: las modificaciones que introdujeron las leyes 27.430, 27.468 y 27.541 a la ley 20.628 (t.o.) son plenamente aplicables al caso; no obstante, y sin desmedro de ello, corresponde atender y evaluar el argumento introducido y mantenido por la accionante, en el sentido de que la liquidación del tributo, bajo las condiciones legalmente impuestas, absorbió una parte sustancial de su renta, excediendo el límite razonable de imposición (v. esta Sala, *in re* “*Banco BMA SAU (ex Banco Itaú Argentina SA) (TF 104149914-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo*”, Causa CAF 35582/2023/CA1, del 5/11/24).

Esta premisa abre el camino al estudio de la materia descripta en el *punto b)* del segundo párrafo del *Considerando VIII* de este voto.

XIV. Que, como es sabido, la acreditación de la confiscatoriedad requiere un serio, completo y preciso despliegue probatorio, lo cual se logra, en principio, a través de un peritaje contable (cfr. CSJN, “*Bertoto, Bruera y Cía*, cit.).

En autos, además de la *prueba instrumental* acompañada por la demandante –de la que di cuenta en el *Considerando VII*–, ofreció *prueba pericial contable*, a cuyo tenor el perito contador de oficio designado acompañó su dictamen el 8/11/23 [12:40 hs], el cual mereció una impugnación del fisco nacional –presentación del 18/12/23 [11:59 hs]–, su contestación por parte del experto –presentación del 7/2/24 [12:17 hs]– y finalmente las consideraciones, respecto de esta última réplica, del ente fiscal –presentación del 6/3/24 [13:14 hs]–.

XV. Que, de la lectura de la información descripta, en lo que incumbe aquí reseñar, se obtiene lo que seguidamente enunciaré.

Como primera mención, el perito contador afirmó que, cotejada la información extraída del informe elaborado por la perito contadora



independiente –el 6/7/20–, junto con sus ocho anexos y la documentación de respaldo, no surgieron discrepancias en orden a su contenido y razonabilidad.

En dicho informe –que, como indiqué, fue acompañado como prueba instrumental–, la experta describió los siguientes conceptos, guarismos y estimaciones: el resultado impositivo considerando la incidencia del ajuste por inflación, computado en su totalidad, ascendería a \$ 13.212.438.235; ello derivaría en una obligación tributaria de \$ 3.963.731.471. Luego, los 5/6 del ajuste que no podrían computarse, alcanzarían un valor de \$ 15.094.843.692. La incidencia porcentual del impuesto abonado, respecto del resultado contable antes del impuesto, sería de 49,33%, y respecto del resultado impositivo, ajustado en su totalidad de 64,27%. Cabe recordar que la alícuota nominal-legal era del 30%.

Al llevar a cabo su labor, el perito contador de oficio obtuvo resultados similares, lo cual plasmó en los puntos de pericia *a.1.*, *a.2.*, *a.3.*, *a.4.* y *b.1.*

Continuando con esta compulsa –y a modo de comprensión de los valores en danza–, en la DDJJ original del IG-2019, la firma consignó un resultado impositivo neto de fuente argentina de \$ 28.305.804.189,62 y otro de fuente extranjera de \$ 1.477.737,98, lo cual derivó en un impuesto determinado –aplicando la alícuota del 30%– de \$ 8.492.184.578,28. Por su parte, en la DDJJ proforma-rectificativa N° 1 expuso un resultado impositivo total de \$ 28.307.281.927,60; un ajuste por inflación de los 5/6 no computados de \$ 15.094.843.692,16 y un resultado impositivo con ajuste integral de \$ 13.212.438.235,44. Al aplicar la alícuota del 30% arrojó un impuesto determinado de \$ 3.963.731.470,63.

De estos últimos valores –coincidentes con los de la pericia contable–, surge el importe objeto de la pretensión de la actora; esto es: \$ **4.528.453.107,65**, equivalente a 8.492.184.578,28 – 3.963.731.470,63.-

XVI. Que si bien la mera comparación de los resultados sin el ajuste y con él no es apto, por sí sólo, para demostrar la afectación del derecho de propiedad del contribuyente –v. *Considerando IX*–, el cúmulo de información reunida en esta causa alcanza para conocer el estado de situación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

contable de la firma actora en el ejercicio 2019, extremo que resulta idóneo y necesario para evaluar la incidencia del IG, particularmente en su renta.

En tal sentido, colijo que los guarismos presentados y explicados por los profesionales que han intervenido en el análisis de la realidad económica de la empresa, en línea con las expresiones argüidas por esta última, permiten avizorar, tal como lo hizo la Sra. juez de grado, que en la especie existió un exceso irrazonable de imposición a la renta, a causa de activarse el mecanismo de ajuste en estudio, en 1/6.

En este tren, de la prueba ofrecida y producida en la causa se desprende que, conforme lo predica la demandante, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación limitado a 1/6, conlleva a la necesidad de ingresar una suma de dinero en concepto de IG, que alcanza la categoría de confiscatoria (en sentido semejante, ver Sala I, “*BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 25304/2019, del 10/7/23; Sala II, “*Pampa Generación SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 14443/2020, del 6/5/25 y Sala V, “*Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 8049/2021, del 27/6/24 e “*Ita SA Industria y Tecnológica SA (TF 111430918-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa CAF 20595/2024, del 15/5/25 y “*FCA SA de Ahorro para Fines Determinados c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 25298/2019, del 11/9/25, entre otros).

De su lado, luce acertado lo apuntado por la juez *a quo*, con relación a la impugnación formulada por el fisco nacional contra la labor desarrollada por el experto contable. En efecto, tomando lectura de la pieza acompañada por la representación fiscal el 18/12/23 [11:59 hs], en la cual cuestiona parte del trabajo realizado por el perito, se colige que no empece a su desarrollo, explicaciones y conclusiones.

Sobre el singular, tiene dicho la Corte Suprema que: “*cabe reconocer validez a las conclusiones del experto para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de*



conocimientos científicos” (Fallos: 319:469; 320:326; 332:1571 1688). En tales condiciones, cuando la pericia aparece fundada en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba de igual tenor que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponerle argumentos científicos de mayor peso, aceptar sus conclusiones. (v. esta Sala, *in re* “*Toer Ariel Esteban c/EN y/o responsable s/ daños y perjuicios*”, Causa N° 30005/2007, del 29/11/16; “*Núñez, Brian Oscar c/ EN-M§ Justicia-SPF- y otros s/ daños y perjuicios*”, Causa N° 29427/2013, del 18/11/20 y “*Maulucci Osvaldo Antonio y otros c/ EN-GN y otro s/ daños y perjuicios*”, Causa N° 6463/2011, del 22/3/22; asimismo, Sala I, *in re* “*Incidente N° I-Actor: Robledo, Héctor Pedro s/inc. de medida cautelar*”, Causa N° 57819/2016, del 4/10/18; Sala II “*BBVA Banco Francés SA c/ AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa N° 31249/2017, del 9/12/20 y “*Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA c/ENAFIP-DGI Resol. 12/12 13/12 (períodos 2005/2006) s/ Dirección General Impositiva*”, Causa N° 11148/2013, del 11/6/21; Sala IV, *in re* “*Cantarelli, Victoria c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa N° 65797/2017, del 6/12/22 y Sala V, *in re* “*Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI Resol. 10/11 (REGN) s/ DGI*”, Causa N° 49252/2011, del 28/17/17; “*M Royo SACIIFYF c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 35502/2019/CA2, del 19/9/23; “*Seguros Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro Dirección General Impositiva*”, Causa CAF/7193/2021, del 26/3/24 y “*Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 67436/2019/CA1, del 12/6/25.

XVII. Que, en lo relativo a la diferente situación económica que caracterizó al año 2002 y al año 2019, lo cual se vería reflejado en las variaciones de los índices de precios, se trata de un argumento que tampoco puede tener favorable acogida. Lo expuesto a lo largo del *Considerandos X* de este voto lo corrobora.

Es que, más allá de las diferentes realidades que pudiera identificar a los distintos períodos anuales en cuestión, reflejados en sus variables macroeconómicas, a los fines de conocer si en un caso particular el impuesto a ingresar es confiscatorio, ha de estarse a los valores que arroje su liquidación en el caso individual (v. esta Sala, *in re* “*Orazul Energy Cerros Colorados SA*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

c/ EN-AFIP-RESOL s/ Dirección General Impositiva”, Causa N° 78130/2017, del 21/4/22; “*Duke Energy Cerros Colorados SA*”, 25/8/23, cit.; “*Seguros Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro Dirección General Impositiva*”, Causa CAF/7193/2021, del 26/3/24 y “*Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 67436/2019/CA1, del 12/6/25).

XVIII. Que, por otro lado, si bien el análisis practicado en autos no es exactamente idéntico al efectuado en “*Candy*” –pues, como dije, aquí se evalúa la incidencia de la aplicación del ajuste por inflación, de acuerdo con las reglas contenidas en las leyes 27.430, 27.468 y 27.541–, no ha de perderse de vista, como norte de esta investigación, que un adecuado estudio de la trama estriba en calcular y comparar la alícuota nominal-legal del impuesto y la alícuota efectiva. Sobre el particular, se ha dicho que, a pesar de que la alícuota efectiva –calculada sin la aplicación total del ajuste– fuere inferior a la ponderada por la Corte en el precedente mencionado, no significa, por esa sola circunstancia, que corresponda desconocer o negar la confiscatoriedad del impuesto (v. esta Sala, *in re*: “*Paolini Hnos SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF/21766/2015, del 24/4/18; “*Orazul Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-Resol s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF/90935/2017/CA1, del 21/4/22; “*Duke Energy Cerros Colorados SA*”, Causa CAF/10307/2017/CA1, cit.; “*Poliresinas San Luis SA (TF 48784-I)*”, cit. y “*M Royo SACIIFYF*”, Causa N° 35502/2019/CA2, cit. “*Seguros Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro Dirección General Impositiva*”, Causa CAF/7193/2021, cit. y “*Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 67436/2019/CA1, cit.; Sala II, *in re* “*Central Piedra Buena SA c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva*”, Causa CAF/6895/2011, del 16/7/15; Sala IV, *in re* “*Paolini Hnos SA*”, cit; “*Aluar Aluminio Argentino SAIC (TF 123459521-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa CAF 43550/2023, del 11/7/24 y “*Bridgestone Argentina SAIC c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 4560/2021, del 10/12/24 y la Sala



V, in re “Fidia SA (TF 48412-I) s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 25286/2023, del 28/6/24, entre otros).

XIX. Que, con relación a las tareas de fiscalización y verificación que debería llevar a cabo el personal de ARCA, esta Sala ha destacado la claridad del artículo 81 de la ley 11.683 –a través del cual se encausó este proceso–, en cuanto a las alternativas con que cuenta el administrado a la hora de formular sus pretensiones contra el fisco.

Al respecto, su segundo párrafo –que refiere al silencio de la administración– no establece diferencias ni excepciones, lo cual conlleva a recordar que: “No corresponde a los jueces introducir distinciones cuando el precepto no lo hace pues, según el conocido adagio, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*” (CSJN, “Suárez, Julio Everto c/ M° J. Y DDHH-art. 6° ley 24.411-resol. 1305/07 (ex. 142.195/04)”, del 7/8/12; “Empresa Alas Argentinas SRL (TF 29.795-I) c/DGF”, del 24/5/16 y “Correo Oficial de la República Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ benef. de litigar s/g.”, del 27/9/22, entre otros).

Por lo expuesto, no es atendible el argumento esgrimido por el fisco nacional aquí considerado.

XX. Que, por todo lo hasta aquí expuesto, cabe reconocer que la pretensión de la firma actora se halla suficientemente fundada y probada, lo cual se traduce en el mérito de la sentencia apelada.

Por ello, **voto en el sentido de confirmar la sentencia apelada**, en cuanto declaró que **la limitación del mecanismo de ajuste por inflación no resulta aplicable en el presente caso, y reconoció el derecho de la parte actora a aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad y al reintegro de la suma reclamada.**

XXI. Que, en lo relativo a la presunta omisión en que habría incurrido la sentenciante de grado, en orden al tratamiento de los 5/6 del ajuste por inflación no computados en el período fiscal 2019, el planteo no merece ser recogido, por las razones que paso a exponer.

Fundamentalmente debido a que el objeto de la demanda que dio inicio a este proceso judicial consistió en la “devolución” de las sumas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

ingresadas en exceso (v. escrito de demanda, Punto II y ampliación de la demanda), no su reconocimiento para imputarlo en períodos futuros.

Ahora bien, con relación a los 5/6 que no pudieron ser computados, a cuyo respecto la parte declara –tanto en la demanda, como en su ampliación–: “*para el caso en que nuestra mandante pueda imputarlos en ejercicios posteriores...*”, sólo cabe interpretar que se refiere al supuesto en el cual se rechazara la demanda en los términos formulados, admitiéndose sólo la aplicación de 1/6 del ajuste por inflación; es que, sostener otra cosa iría en contradicción con la propia pretensión de reintegro de las sumas abonadas.

Pues bien, en orden al modo en que aquí resuelvo, esto es, admitiendo la aplicación total del ajuste por inflación –o sea, 6/6–, pierde sustento el tratamiento de este particular asunto.

A todo evento, en cuanto a los intereses que generan las sumas a restituir, me remito al tratamiento que a ese asunto dedicaré *infra*.

XXII. Que en cuanto a lo argüido por la representación fiscal, con respecto a la imposibilidad de suplir la realización del procedimiento previsto en la **RG (DGI) 2224** durante la etapa de ejecución de sentencia en casos de repetición de impuestos, tengo para mí que la Sala IV de esta Cámara ya se ha pronunciado sobre el particular en: “*Autopista del Sol SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol 102/03 s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 41708/2003, del 1/10/13 –v. también “*Central Térmica Loma de la Lata Sociedad Anónima c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 47831/2010, del 25/8/16–, resolviendo que no resultaba procedente la pretensión de aplicar el procedimiento previsto en la referida resolución general, como modo de ejecución de lo dispuesto en la sentencia.

Afirmó que :“*...nos encontramos frente a un proceso de ejecución de sentencia y el art. 1º de la R.G. 2224/79 que dice: [l]as devoluciones de pagos o ingresos en exceso **podrán solicitarse** cuando los saldos acreedores emerjan de determinaciones de oficio, de declaraciones juradas primitivas o rectificativas, siempre que estas últimas disminuyan el saldo acreedor establecido en las primeras o que dichos saldos hayan sido considerados de*



libre disponibilidad o que se asimilen a tales...” (el texto destacado en negrita obra en el original) (v. *Considerando III*, séptimo párrafo).

Y agregó que: “*...asimismo, serán considerados los saldos que surjan de resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos de repetición y declaraciones juradas rectificativas conformadas por esta Dirección...*” (v. *Considerando III*, octavo párrafo).

En ese sentido, se dejó sentado que, en atención al modo en que fue redactada la referida norma, no era de aplicación obligatoria al caso.

Así también, expresó que: “*...por lo demás, carecería de razonabilidad imponer a la actora la obligación de someterse a un nuevo procedimiento administrativo toda vez que ha resultado vencedora en la contienda judicial y la ley 23.982 prevé el modo en que se deben cumplir las sentencias condenatorias contra el Estado Nacional...*” (v. *Considerando III*, octavo párrafo).

Más aun, dejó constancia de que: “*...sólo a mayor abundamiento, no se puede soslayar que el art. 6º de esa norma, que aludía a los supuestos de devoluciones de saldos provenientes de resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos de repetición, fue derogado por el art. 1º, inc. e, de la R.G. 2076/06...*” (v. *Considerando III*, noveno párrafo).

En consecuencia, concluyó que el agravio atinente al modo de ejecución dispuesto en la sentencia, no podía prosperar.

En consonancia con dicho temperamento se han expedido la mayoría de las Salas de esta Cámara; la Sala I en “*BBVA Consolidar Seguros SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol 70/05 (GC) y otro s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 14527/2005, del 16/5/17; “*Industrial and Commercial Bank of China SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 32448/2016, del 4/2/21 y “*BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 57426/2016, del 6/5/21, entre otras, y la Sala II lo hizo en las “*Industrial and Commercial Bank of China S.A. c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 77855/2017, del 3/2/22 y “*Industrial and Commercial Bank of China SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 84341/2016, del 6/9/22, entre otras.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

En virtud de este desarrollo, corresponde rechazar el agravio articulado por la parte demandada, adoptando –en lo sucesivo– el temperamento impreso por la Sala IV de esta Cámara en la sentencia recaída en la citada causa “*Autopista del Sol*”; en sentido análogo, v. esta Sala *in re* “*Telefónica de Argentina SA c/EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 70967/2017, del 25/9/25 y “*Sumitomo Chemical Argentina c/ EN-AFIP s/ proceso de Conocimiento*”, Causa CAF 15225/2021, del 7/10/25).

XXIII. Que, con relación al planteo de la demandante, referido a la **tasa de interés** –en el cual requiere que se aplique la tasa pasiva publicada por el BCRA, en lugar de las previstas en las resoluciones dictadas con posterioridad a la resolución MH 598/19–, también corresponde confirmar el criterio impreso por la Sra. juez de grado para su rechazo.

Efectivamente, tal como acertadamente lo señaló el Sr. Fiscal General en su dictamen del 15/4/25, la parte actora se limitó a señalar genéricamente la afectación de su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que las normas resultan lesivas de sus derechos constitucionales (en igual sentido, v. esta Sala *in re*: “*Antonelli, Daniela c/ EN-AFIP-LEY 20628 s/ amparo Ley 16.986*”, Causa CAF 24319/2023, del 31/10/23; “*Torres Sumarísimo, Silvia Griselda c/ EN-ARCA-Ley 20.628 s/ Proceso de Conocimiento*”, Causa CAF 5416/2025, del 14/8/25; “*Arias Usandivaras, María Carmen c/ EN-AFIP-Ley 20.628 s/ Proceso de Conocimiento*”, Causa CAF 41005/2023, del 26/8/25, entre otros; en el mismo sentido, Sala IV, *in re*: “*Suárez, María Cristina c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ amparo Ley 16.986*”, Causa CAF 38983/2023, del 21/12/23).

Recuérdese que, una declaración como la requerida, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última *ratio* del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera (cfr. CSJN, Fallos: 327:1899 y 342:685) y/o cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, requiriendo de manera inexcusable un sólido



desarrollo argumental y la demostración de un agravio determinado y específico (cfr. CSJN, Fallos: 249:51; 299:291; 335:2333; 338:1444; 338:1504; 339:323; 339:1277; 340:669 y 341:1768).

Por lo demás, no es predicable el argumento sustentado en la falta de equiparación de la tasa de interés con los índices inflacionarios, dado que ello conduciría a desconocer las normas jurídicas que vedan la indexación de valores (v. Sala IV, “*Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 63190/2019/CA1, cit.; “*PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo*”, del 19/11/24 y Sala III, “*Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 11207/2020, cit. y en “*Lixis SAU (TF 85354116-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa 14663/2024, del 20/2/25, y sus respectivas citas).

En orden a lo expuesto, al capital que aquí se ordena restituir habrá de adicionarse los intereses correspondientes, para lo cual deberá tenerse en cuenta las pautas de aplicación que surgen del artículo 179 de la ley 11.683 y de las diversas resoluciones dictadas por la cartera económica nacional en el segmento de tiempo correspondiente, o la que la sustituya en el futuro (v. CSJN, “*Astillero Naval Federico Contessi SACIFAN c/ AFIP-DGI s/ cobro de pesos/sumas de dinero*”, del 17/9/24).

XXIV. Que, por último, en cuanto a las **costas** del proceso –lo cual incluye la de ambas instancias–, corresponde confirmar la sentencia apelada, en atención a la complejidad y novedad que reviste la cuestión examinada en la causa (cfr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 68 segundo párrafo) (cfr. esta Sala, *in re* “*Akapol SACIFI c/EN-AFIP-DGI-Resol 41/07-períodos 2002/2003*”, Causa N° 10144/2009, cit.; “*Orazul Energy Cerros Colorados SA*”, Causa N° 90935/2017, cit; “*Carsa SA (TF 34186-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa N° 60220/2022, del 23/3/23 y “*Poliresias San Luis SA (TF 48784-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa N° 19467/2022, del 15/6/23; “*M Royo SACIIFYF*”, Causa CAF 35502/2019/CA2, cit; “*Duke Energy Cerros Colorados SA*”, cit; “*Seguros*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III

CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro Dirección General Impositiva”, Causa CAF/7193/2021, cit; “*Banco BMA SAU (ex Banco Itaú Argentina SA) (TF 104149914-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo*”, Causa CAF 35582/2023/CA1, cit. y “*Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 67436/2019/CA1, cit. En igual sentido: Sala I, “*BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 25304/2019, cit.; “*Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 8934/2020, del 26/4/24; “*RCI Banque c/ EN-AFIP-DGI-expte 2073941/22 s/ Dirección General Impositiva*”, Causa CAF 21392/2023, del 21/10/25; Sala II, “*Pampa Generación SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 14443/2020, cit; “*Diransa SRL c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 10423/2021, del 12/9/25 y Sala V, “*Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento*”, Causa CAF 8049/2021, cit. e “*Ita SA Industria y Tecnológica SA (TF 111430918-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo*”, Causa CAF 20595/2024, cit.).

XXV. Que, por todo lo expuesto, si mi voto es compartido, corresponderá confirmar la sentencia apelada y distribuir las costas en el orden causado.

El Doctor Jorge Eduardo Morán dice:

I. Que, concuerdo con la reseña de antecedentes efectuada por mi distinguido colega en el voto que precede, a la cual me remito por razones de brevedad. No obstante, difiero con la solución propiciada.

II. Que, el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora contra el diferimiento estipulado en el art. 194 de la ley 20.628 (t.o. 2019), fundado en los principios de no confiscatoriedad y de capacidad contributiva, se sustenta en precedentes, argumentos y probanzas que resultan sustancialmente análogos a los ya analizados en mi voto de la causa “*Marlew SA c/ EN - AFIP s/ Proceso de Conocimiento*” (expte. 17779/2020, sentencia



del 13/11/2025), tramitada por ante la Sala IV de esta Cámara. En esa oportunidad, concluí que:

(i) Los lineamientos trazados por la Corte Federal en el precedente “Candy” no resultaban de aplicación en la especie.

(ii) La accionante no logró evidenciar de qué manera el diferimiento cuestionado provocó –en su caso concreto– el supuesto de confiscatoriedad que endilgaba; por cuanto, a partir de los tres errores que cometió al construir su planteo, ignoró el resultado final neutro que dicho instituto efectivamente generó sobre su patrimonio, sin aportar fundamentos y pruebas que logren desvirtuar o rebatir dicha cuestión.

Dada la semejanza existente entre el planteo de autos con aquél examinado en el voto reseñado, las explicaciones y conclusiones expuestas en este último resultan de plena aplicación al caso de marras; por lo que cabe sin más remitirse a ellos *brevitatis causae*.

Por lo tanto, corresponde acoger favorablemente el agravio de la demandada y revocar la sentencia de grado en cuanto admitió el planteo de confiscatoriedad efectuado por la demandante.

III. Que, sentado ello, cabe destacar que, si bien la accionante alegó también que la normativa impugnada resultaba violatoria de los principios constitucionales de igualdad y de razonabilidad, lo cierto es que tales planteos no fueron sustentados en esta instancia con el debido rigor argumental y probatorio que debían tener para su consideración.

Igualmente, es importante destacar que las manifestaciones efectuadas por la actora en lo referente a estos puntos se basaron en la presunta existencia de un gravamen patrimonial específico ocasionado a su respecto que, en rigor, no resultó demostrado en los presentes actuados; conforme las apreciaciones formuladas en el considerando anterior.

IV. Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de la demandada, revocar la sentencia de grado y rechazar la demanda de repetición incoada; en los términos que surgen de los considerandos que anteceden.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Esto, lleva necesariamente a que la demandante deba computar los cinco sextos diferidos del ajuste por inflación del impuesto a las ganancias 2019 en los ejercicios fiscales correspondientes.

Cabe indicar que, para el caso en que la demandante no hubiere procedido ya de esa manera, aquélla podrá obtener el reintegro de los importes que se hubieren pagado en demasía por dichos períodos como consecuencia de la falta de cómputo de las referidas cuotas (cfr. doctrina de la Sala IV *in re* “*Salentein Fruit SA*”, citado *supra*). Ello, claro está, por la vía y por ante la instancia correspondiente, en tanto la presente contienda quedó encorsetada exclusivamente a la repetición del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio 2019.

Es importante señalar que, a los fines del inicio del cómputo de los intereses que eventualmente correspondieren, el fisco nacional no podrá desatender la fecha del reclamo administrativo de repetición de autos y la fecha de pago de cada obligación anual –si aquéllas fueran posteriores–. Esto, porque –en este caso en particular– ya desde dicho reclamo la demandada dejó sentado su reclamo subsidiario de intereses para el caso en el que se resolviera en el sentido que aquí se propone (v. Capítulo X; cuestión además reiterada en la ampliación de demanda; en el pedido de aclaratoria de fecha 13/02/2025; y en su expresión de agravios).

V. Que, por último, adhiero al criterio de distribución de costas establecido en el voto que antecede.

VI. Que, por todo lo expuesto, voto por: hacer lugar al recurso de la accionada, revocar la sentencia de grado y rechazar la demanda (cfr. considerando IV); con costas en ambas instancias por su orden (cfr. considerando V).

La Doctora Liliana M. Heiland dijo:

I. Adhiero al voto del Dr. Sergio Fernández, en lo atinente al fondo del problema, la tasa de interés aplicable, y la forma en que deben imponerse las costas.



II. Comparto, también, la solución que propone respecto a la inaplicabilidad al caso, de la RG 2224/79; por las siguientes razones:

(a) Es cierto que, ante la existencia de saldos a favor del contribuyente (de libre disponibilidad o asimilables), correspondería su devolución en los términos de la citada RG (conf. doc. Sala I, en “*Chryse SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 34568/17, del 9/5/19, y “*Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 83207/15, del 3/9/19; Sala II, en “*Camuzzi Gas Pampeana SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 22277/15, del 12/3/20; y Sala V, en “*BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 91692/17, del 24/10/23, entre otros).

(b) Sin embargo, también lo es, que los créditos y las retenciones con las cuales BBVA canceló parcialmente la obligación tributaria en trato, fueron absorbidas por el monto que le correspondía pagar en concepto de IG (ejercicio 2019), en discusión (conf. prueba documental acompañada e informe pericial contable).

(c) El monto en exceso que aquí se ordena reintegrar (\$ 4.528.453.107,65), quedó comprendido en el pago que realizó el BBVA, por Volante Electrónico de Pago (VEP), el 26/5/2020 (\$ 6.759.197.245,21; ver “Documental F”, acompañada el 18/11/2021).

(d) No se trata de devolver saldos de libre disponibilidad a favor de la firma actora, por lo que consecuentemente, no corresponde aquí la aplicación de la RG 2224/79, que el Fisco pretende (conf. doc. Sala I, en “*Industrial and Comercial Bank of China SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 32448/16, del 4/2/21; “*BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 57426/16, del 6/5/21; “*Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 5894/14, del 23/5/24; y “*RCI BANQUE c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva*”, exp. 21392/23, del 21/10/25, entre otros).

Por todo lo expuesto, en atención al resultado que informa el acuerdo que antecede, y por mayoría, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, **SE RESUELVE: 1º)** Rechazar el recurso de apelación deducido por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 19202/2021/CA1; BANCO BBVA ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-
LEY 20628 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, junto con su aclaratoria del 19/2/25. 2º) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (cfr. CPCCN, art. 68 segundo párrafo).

En orden a las apelación del perito contador Carlos A. Casañas, contra la regulación de honorarios practicada en el punto resolutive N° 2º de la sentencia apelada; teniendo en cuenta la calidad y eficacia de las labores realizadas al confeccionar el dictamen pericial contable, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior (cfr. art. 3 y concordantes del decreto-ley 16.638/57; arts. 16, 19 de la ley 27.743 y Res. SGA N° 36/26).

Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web <http://www.cij.gov.ar/>.

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara y la Dra. Liliana María Heiland, en virtud de la desinsaculación practicada por la Secretaría General de esta Cámara y la aceptación del día 20/2/26.

Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General – mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta alzada– y, oportunamente, devuélvase.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
(en disidencia)

LILIANA MARIA HEILAND

